

Cuadernos del Sur

Año 18 - Nº 33

Mayo de 2002

NUEVAS DIRECCIONES

www.cuadernosdelsur.org.ar
editores@cuadernosdelsur.org.ar

Tierra
del  fuego

Que se vayan todos. Crisis, insurrección y caída de la convertibilidad*

Alberto R. Bonnet

A esta altura de los acontecimientos, aún cuando continúan desarrollándose en las calles luchas sociales decisivas, estamos ya en condiciones de afirmar que la insurrección popular de diciembre de 2001 acabó con el modelo neoliberal vigente en Argentina durante la década de los noventa. En efecto, la masiva insurrección popular de diciembre puso fin a esa modalidad específica que adoptó la ofensiva capitalista desarrollada en Argentina a lo largo de la pasada década, una de las más profundas de Latinoamérica, centrada en la inserción de la economía doméstica en el mercado mundial en condiciones de moneda convertible.

El propósito de este trabajo es proponer un análisis provisorio de esta crisis de la convertibilidad. Comenzamos con una descripción y



explicación sintéticas de la naturaleza y la dinámica propias de la convertibilidad (1), pero tendremos que volver nuestra atención hacia la

* Este artículo se inspira inicialmente en una serie de conferencias y mesas redondas organizadas en la Universidad Autónoma de Puebla y en Universidad Nacional Autónoma de México durante enero y febrero del corriente. Quisiera agradecer en este sentido, por lo menos, a los doctores J. Holloway, S. Tischler y A. Valle Baeza por sus invalores aportes.

creciente resistencia social a la misma cuando examinemos sus límites (2), puestos de manifiesto crecientemente durante la depresión económica, la crisis política y la oleada de luchas sociales que se iniciaron hacia mediados de 1998 y se extienden hasta el presente. Nuestro análisis específico de la crisis final de la convertibilidad (3) será, por consiguiente, inseparable del análisis de la mencionada insurrección popular de diciembre de 2001. Para finalizar, avanzaremos algunas consideraciones más generales (4) acerca del significado y de las implicancias de este proceso de resistencia social y de crisis de la convertibilidad.

1. La disciplina de la convertibilidad

El capitalismo argentino de posguerra se caracterizó porque, en su seno, la lucha de clases se expresaba inflacionariamente. La lucha entre capital y trabajo y entre las distintas fracciones del capital se expresaba así en la forma de escaladas inflacionarias periódicas.¹ Los procesos hiperinflacionarios registrados entre 1989 y 1991 marcaron la culmina-



ción de este modo de funcionamiento del capitalismo argentino de posguerra. En efecto, dichos procesos hiperinflacionarios constituyeron una feroz ofensiva del capital contra el trabajo, un proceso de expropiación extraordinaria o, más precisamente, de "acumulación originaria reiterada".² El poder adquisitivo de los salarios se esfumaba cotidianamente, el desempleo alcanzaba una magnitud sin precedentes y los trabajadores se lanzaban al saqueo de los supermercados pero, al mismo tiempo, los requisitos más elementales para la estimación de costos y beneficios o para el mantenimiento de las cadenas de pagos se esfumaban y, por ende, quedaba en entredicho la propia continuidad de la acumulación.³ La convertibilidad del peso, es decir, la fijación por ley del tipo de cambio, garantizada por la obligación de un banco central independiente de vender dólares de sus reservas a la paridad establecida de uno a uno, significó por su parte, desde comienzos de 1991, un intento de poner fin a dicha dinámica sustrayendo el valor del dinero respecto de la lucha de clases. Es el intento que clausurarían, diez años más tarde, la crisis y la insurrección de masas.

Eliminado el recurso de las devaluaciones competitivas y en condiciones de apertura casi irrestricta de la economía –y, por supuesto, de la desregulación generalizada de los

flujos de capitales y mercancías asociada con la llamada “globalización”, la inserción del capitalismo argentino en el mercado mundial impuso así una presión constante hacia el incremento de la explotación del trabajo. En efecto, desde una perspectiva sustentada en la teoría del valor-trabajo, la inserción de una economía en el mercado mundial depende de su competitividad, entendida sin más como sinónimo de los costos laborales unitarios de las mercancías producidas en su territorio en relación con idénticos costos de las mercancías producidas en el territorio de otras economías.⁴ En condiciones extremas de un tipo de cambio fijo por convertibilidad, naturalmente, esto equivale a decir que dicha inserción depende exclusivamente del salario y de la productividad del trabajo. Pero el salario y la productividad del trabajo no son, a su vez, sino los indicadores del grado de explotación del trabajo o, en los términos de Marx, de la tasa de plusvalor vigente en una economía.

Es importante advertir aquí que esta tasa de explotación del trabajo no solamente determina la capacidad de inserción de una economía en el comercio internacional sino, asimismo, su capacidad de captación de flujos internacionales de capitales productivos e, indirectamente, de capitales financieros.⁵ La tasa de explotación del trabajo determi-



na por ende el balance de pagos de la economía en cuestión en su conjunto así como también –algo particularmente importante en nuestro caso– la mayor o menor incidencia del servicio de la deuda externa dentro del mismo. La moneda interna, mientras tanto, queda atada a la divisa de referencia, en nuestro caso el dólar, y su valuación afecta a la competitividad de la economía en la medida en que fluctúe el tipo de cambio de dicha divisa de referencia con respecto a monedas de terceras economías con las que la economía en cuestión mantenga relaciones económicas.

La convertibilidad conlleva entonces, como decíamos, una presión constante hacia el incremento de la explotación del trabajo. Esta presión se ejerce inmediatamente sobre los propios capitalistas, que se ven enfrentados a la alternativa de reconversión o quiebra, y los capitalistas descargan a su vez dicha presión sobre los trabajadores, que se ven enfrentados a la alternativa de mayor explotación o resistencia. Ambas alternativas estuvieron presentes en los comienzos de la con-

vertibilidad. Sin embargo, aún cuando se registraron importantes luchas defensivas por parte de los trabajadores, el sometimiento a una mayor explotación se impuso paulatinamente como el precio que los trabajadores eran obligados a pagar por la estabilidad, es decir, a cambio de que la burguesía no reiniciara sus expropiaciones hiperinflacionarias.⁶ Y, a pesar de que la quiebra de empresas y aún el desmantelamiento de sectores enteros del aparato productivo también estuvieron presentes, fue la reconversión la dinámica predominante en los inicios de la convertibilidad.⁷

Adviértase que, en este sentido, la naturaleza propia de la convertibilidad no puede entenderse adecuadamente en función de un supuesto patrón de acumulación dominado por la “valorización financiera”. En pocas palabras esta interpretación, ampliamente difundida entre sectores críticos de la convertibilidad, explica la instauración de la misma en términos de continuidad de un patrón de acumulación rentístico y desindustrializante instaurado por la dictadura militar y consolidado a través de disputas entre distintas fracciones de la burguesía. Y explica la crisis de la convertibilidad en términos de una crisis de demanda originada en la regresiva distribución del ingreso que resultaría de dicho patrón de acumulación.⁸ La nostalgia populista ins-

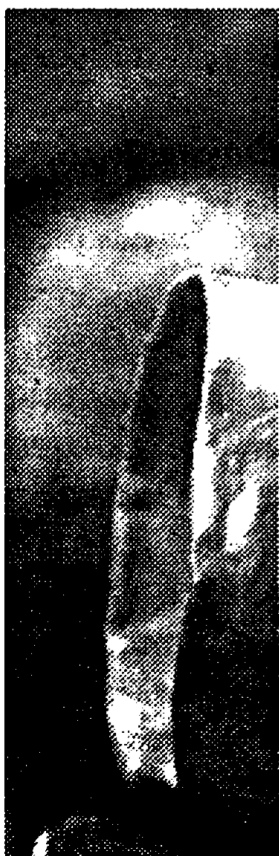
cripta en la matriz de esta interpretación conduce así, sucesivamente, a una fetichización de las finanzas, a una visión fraccionalista que sustituye la lucha de clases por pujas internas de corte conspirativo entre representantes de distintas fracciones de la burguesía, a un oscurecimiento en fin de la verdadera naturaleza, dinámica y razones de la crisis de la convertibilidad.

Ahora bien, aquella presión constante hacia el aumento de la explotación del trabajo es la matriz del disciplinamiento social que sustentaría la hegemonía burguesa más o menos sólida, que denominamos “hegemonía menemista”, que signó a la sociedad y a la política argentinas durante toda la década de los 90.⁹ La convertibilidad, que desata dicha presión, tampoco puede entenderse entonces simplemente en términos de política anti-inflacionaria: debe entenderse también, y fundamentalmente, como un caso de las políticas monetarias neoconservadoras de disciplinamiento del trabajo.¹⁰

Pero la convertibilidad desató así, inevitable-



mente, una suerte de "carrera del peso". En efecto, los propios tipos de cambio están a su vez determinados por la competitividad de las economías de referencia: a las economías líderes en el mercado mundial, al menos en el largo plazo, tienden a corresponder altos tipos de cambio.¹¹ La convertibilidad por ley, en otras palabras, debía refrenarse en el futuro mediante el correspondiente aumento de la competitividad de la economía argentina en el mercado mundial, esto es, a través del aumento de la explotación del trabajo que debía sustentar dicha competitividad. Esta carrera podía desarrollarse sobre dos sendas diferentes conforme, precisamente, los dos componentes de la tasa de explotación del trabajo antes



tes mencionados. En condiciones de auge de la economía, que en nuestro caso es alimentado por el ingreso de capitales desde el exterior, dicha carrera descansaba sobre la capacidad de los capitalistas de aumentar la productividad del trabajo, racionalizando la organización y los procesos de trabajo

hasta el extremo y, a partir de ese punto, invirtiendo en nuevas tecnologías. Por el contrario, en condiciones recesivas, que en nuestro caso son acompañadas por un reflujo de capitales externos que desencadena una espiral deflacionaria, dicha carrera depende de la capacidad de los capitalistas de bajar sin más los salarios nominales. (Recordemos que está vedada la posibilidad de reducirlos inflacionariamente en términos reales.) Esta posibilidad de bajar los salarios nominales se ve a su vez potenciada por los altos niveles de desempleo generados en el propio período de auge, a través de las quiebras y las reconversiones ahorradoras de trabajo, e incrementados en el período recesivo a raíz del aumento de esas quiebras y las reducciones de plantas.¹² El creciente desempleo refuerza de esta manera, junto con la presión de las deudas dolarizadas sobre los consumidores y los inversores endeudados durante el período de auge, el disciplinamiento impuesto por la convertibilidad. Y estas condiciones de auge y de recesión se ven a su vez sobredeterminadas, como decíamos, por el comportamiento de la divisa de referencia, en nuestro caso, por la revaluación del dólar en relación con otras divisas clave que tiene lugar durante la segunda mitad de los 90.¹³

Ambas maneras de correr en la carrera del peso coexistieron duran-

te los 90. Los períodos de auge estuvieron signados efectivamente por una dinámica de racionalización del trabajo e inversión: precarización de los contratos y condiciones de trabajo, inversiones en nuevas tecnologías y, además, un acompañamiento del estado neoconservador mediante políticas reaganianas de apoyo a la rentabilidad del capital (reducción de aportes patronales a la seguridad social, reformas tributarias regresivas y alicientes varios a la inversión, generación de nuevas oportunidades de inversión rentable a través de privatizaciones). Los períodos de recesión, por su parte, estuvieron signados por la reducción de los salarios nominales y un incremento aún mayor del desempleo, acompañados también por el estado neoconservador a través de su legalización de contratos de trabajo precarizados, recortes de salarios públicos, etc. El resultado es una combinación de comportamientos muy disímiles, cuyo saldo 1991-2001 es una tasa de crecimiento anual promedio del PBI del 3,6% —esto es, el producto del 2001 equivale a algo menos de una vez y media el correspondiente a 1990; una tasa promedio de aumento de la inversión interna bruta fija de aproximadamente el 6,6% anual; una tasa de aumento de la productividad del trabajo que se habría ubicado en torno al 5,3% anual; una caída acumulada del salario que se acercaría

al 10%; y un nuevo piso para la tasa de desempleo que se elevaría por encima del 12% de la PEA.¹⁴

Ambas maneras de correr la carrera del peso coexistieron durante los 90, decíamos, pero fue la segunda la que paulatinamente fue imponiéndose, como inequívoco indicio de que la burguesía estaba perdiendo esa carrera del peso. En efecto, esos datos globales de desempeño de la economía argentina no alcanzan para una caracterización adecuada de la dinámica inherente a la convertibilidad. Si se analiza más detenidamente ese desempeño, en cambio, se advierte enseguida que el comportamiento de la economía argentina durante la convertibilidad fue altamente cíclico. Mucho más importante aún, se advierte también que las recesiones fueron cada vez más profundas y duraderas; que, por consiguiente, la manera deflacionista fue imponiéndose paulatinamente como la única manera posible de correr la carrera del peso; que, sin embargo, la posición de la economía argentina en el mercado mundial fue deteriorándose; que la gran burguesía argentina, en síntesis, fue poco a poco perdiendo su carrera del peso.

La economía argentina registró fuertes fluctuaciones durante la década. El producto se incrementó a una tasa del 14,8% y la inversión a una del 42,9% anuales en el marco de la inmediata recuperación que

sucedió a la depresión hiperinflacionaria, es decir, del primer trimestre de 1991 al segundo de 1992. Pero ambos sufrieron ya una breve desaceleración, con tasas anuales del 0,6 y 4,3% respectivamente, entre el segundo trimestre de 1992 y el primero de 1993. La recuperación posterior, que registró tasas del 10,9 y 33,3% anuales entre el primer trimestre de 1993 e igual período de 1994, fue cerrada por la denominada "crisis del tequila". En realidad, la recesión de 1994-95 se puso de manifiesto ya como una desaceleración del producto y la inversión antes de que se propagaran las consecuencias de la crisis mexicana de diciembre (en tasas anuales de 3,6 y 3,6% entre el primer y el cuarto trimestre de 1994), para convertirse en depresión abierta desde entonces (-10 y -30% entre el cuarto trimestre de 1994 y el tercero de 1995). La prolongada recuperación posterior (8,2 y 20,6% entre el tercer trimestre de 1995 y el segundo de 1998), finalmente, se cerró con la depresión que se extiende hasta nuestros días y a la que nos referiremos con mayor detalle más adelante.¹⁵

Pero, además de esta intensa ciclicidad, pueden constatarse algunas tendencias más duraderas que subyacen a esas fluctuaciones. Las recesiones fueron cada vez más profundas y duraderas. Mientras que la primera recesión (II/1992 a I/1993) consistió en realidad en una breve

desaceleración, la segunda (I/1994 a III/1995) fue más extensa y coronada por tres trimestres de depresión abierta y la tercera (II/1998 en adelante) muestra ya el récord de tres años y medio de duración. En consecuencia, la salida deflacionista, como veremos más adelante, fue imponiéndose como única salida posible. La posición de la economía argentina en el mercado mundial, sin embargo, fue deteriorándose. A pesar de los aumentos de productividad y competitividad de ciertos sectores o grandes grupos particulares (los complejos aceitero y lácteo, la industria de fertilizantes y de tubos sin costura, etc.), alcanzados a partir de los procesos de inversión desarrollados de las fases expansivas, la posición de conjunto de la



economía argentina en el mercado mundial fue debilitándose, como puede apreciarse atendiendo a los indicadores de productividad y competitividad y, en definitiva, a la persistente tendencia hacia déficits comerciales y de pagos.¹⁶ Puede concluirse entonces que los mencionados aumentos de productividad y competitividad basados en la racionalización de la organización y los procesos de trabajo y en las nuevas inversiones, aunque ciertamente reales, resultaron empero cada vez más insuficientes para garantizar la posición de un capitalismo argentino con peso convertible en el mercado mundial.

2. La indisciplina social

Intentamos describir y explicar hasta aquí, muy sintéticamente, la naturaleza y la dinámica propias de la convertibilidad. Pero esto no es suficiente para explicar el derrumbe de esa convertibilidad. ¿Por qué el peso perdió finalmente su carrera? ¿por qué esa segunda manera de correr la carrera del peso, que fue imponiéndose poco a poco, no pudo evitar la crisis y el derrumbe de la convertibilidad?

Pensamos que responder a estas preguntas requiere que nos desplacemos respecto de la perspectiva de análisis que adoptamos hasta ahora. En efecto, el mantenimiento de la convertibilidad, aún en condiciones recesivas, siempre es posible.

Siempre puede continuar la carrera del peso mediante una ofensiva cada vez más feroz del capital contra el trabajo, es decir, mediante reducciones de salarios nominales y de precios que restituyan los niveles de competitividad. El éxito de una ofensiva semejante podría postularse en términos de una reducción de los costos laborales unitarios a un nivel equiparable a los vigentes en otras economías competidoras como, por ejemplo, la brasileña. Pero esa manera de mantener de la convertibilidad encontró, afortunadamente, un límite más próximo a la supervivencia de la clase trabajadora: un límite en la propia resistencia del trabajo. Debemos pues cambiar nuestro ángulo de análisis y detenernos un momento en este proceso de la resistencia.

Este límite de la convertibilidad fue poniéndose de manifiesto crecientemente en la prolongada depresión que aún atravesamos. La economía argentina, en verdad, nunca se recuperó de las consecuencias de la crisis iniciada en el sudeste asiático hacia mediados de 1997, crisis que luego se extendió hacia otros de los llamados "mercados emergentes" (recuérdense las crisis rusa y brasileña) y arribó al Río de la Plata hacia la segunda mitad de 1998. En efecto, la desaceleración ya se insinuó hacia el tercero o cuarto trimestre de 1998, poniendo fin así a la acelerada recupera-

ción posterior a la crisis de 1995.¹⁷ La tasa de crecimiento del producto, de todas maneras, fue del 3,9% en 1998. Pero esa desaceleración se convertiría en depresión abierta en 1999, que registraría una caída del producto del 3,4%, desatando así las tendencias deflacionarias que se prolongan hasta nuestros días.

Esta recesión no condujo inmediatamente al derrumbe del disciplinamiento social impuesto por la convertibilidad, desde luego, pero se expresó enseguida de manera política. El período de la administración de Menem posterior a la renuncia del ministro de economía que había instaurado la convertibilidad, D. Cavallo, significó así un punto de inflexión. Este período de ocaso de la administración de Menem, con R. Fernández a cargo de la política económica, se popularizó como el período de la política del “piloto automático”, es decir, justamente de mantenimiento de la convertibilidad a rajatabla mediante ajustes permanentes que potenciaban aquellas tendencias deflacionarias. El estado neoconservador acompañaba así, a través de su política económica, los mecanismos deflacionarios de ajuste desatados por la propia crisis. Pero la conflictividad social comenzó a intensificarse. La coyuntura de mediados de 1999 estuvo signada, en efecto, por una serie de conflictos protagonizados por los productores agropecuarios agobiados por las deudas y los

peajes (paros y cortes de ruta en Buenos Aires, Santa Fé, Entre Ríos, Córdoba, Santiago del Estero, Río Negro y otras provincias), por los docentes, con sus reclamos salariales (paros y montaje de la “carpa blanca” en Plaza Congreso) y por los desocupados, que exigían subsidios de desempleo (cortes de ruta y movilizaciones en Tierra del Fuego, Neuquén, San Luis, Corrientes y otras provincias).¹⁸ El resultante desprestigio de la administración de Menem signó la derrota del Partido Justicialista en las elecciones presidenciales de octubre de 1999. Sin embargo, el triunfo electoral de la Alianza y el recambio de administraciones no significó aún que la hegemonía menemista, estructurada por la convertibilidad, se hubiera desestructurado. La hegemonía social y política menemista seguía en pie: los votantes habían decidido en las urnas, simplemente, que los administradores aliancistas eran mejores garantes de la convertibilidad que sus pares justicialistas que la habían instaurado. Y la administración de De La Rúa y su primer ministro de economía, J. L. Machinea, demostrarían cabalmente estar comprometidos con el mantenimiento de esa convertibilidad, tanto durante la campaña electoral como desde el primer momento de su ejercicio.¹⁹

El discurso centro-izquierdista que la Alianza había adoptado durante su campaña, que no compro-



metía sino a un marco más prolijo –una versión de las “reformas de segunda generación” del Banco Mundial– para ese mantenimiento de modelo neoliberal vigente, se disolvió rápidamente. Su primer iniciativa política importante, la promulgación de la ley de reforma laboral que profundizaba y legalizaba los niveles de precarización de los contratos y condiciones de trabajo alcanzados por la administración menemista, se aprobó a cambio del pago de comisiones a los parlamentarios. La continuidad que implicaba el gobierno de la Alianza respecto de aquel mantenimiento de la convertibilidad a través de ajustes permanentes se puso en descubierto con idéntica premura. Machinea, supuestamente un economista heterodoxo, demoró apenas unos días en retomar la carrera del peso en piloto automático. Y sumó así tres grandes ajustes a los impuestos por su antecesor menemista: un paquete de U\$S 3700 millones que incluía un impuestazo a los sectores populares en diciembre de 1999, un recorte del 12 al 15% de los sueldos públicos que implicó otros U\$S 600 millones de ajuste en mayo de 2000 y, finalmente, un recorte de gastos para el presupuesto 2001 por otros U\$S 700

millones. La política económica de la administración aliancista durante ese período podía definirse como una política consistente en ajustar y esperar pasivamente que la recuperación cayera del cielo. Pero dicha recuperación apenas si pudo vislumbrarse durante algunos meses del 2000, que sin embargo cerró con una caída del producto de 0,5%, para alejarse como nunca antes durante el 2001, que estaría cerrando, según datos provisorios, con otra caída de 3,8% de dicho producto.

Ahora bien, tras una tregua entre septiembre de 1999 y mayo de 2000, es decir, durante el período en que se desarrollaron las campañas y las elecciones presidenciales, el recambio y la asunción de la nueva administración, las luchas sociales volvieron a intensificarse. Se sucedieron por entonces los dos primeros paros generales –los paros del 5 de mayo, de la CGT-Moyano y la CTA, y del 9 de junio, de la CGT-Moyano, la CTA y la CGT-Daer– contra la política económica del nuevo gobierno y, en particular, contra su proyecto de desregulación de las obras sociales. Los docentes y otros trabajadores del estado, por su parte, llevaron adelante varios paros y movilizaciones de mayo a julio en respuesta a los ajustes de sueldos públicos y de presupuesto educativo. Y los desocupados reiniciaron los cortes de ruta en el interior (Salta, Corrientes). Si se examina la

evolución de los conflictos en retrospectiva puede advertirse que una tregua como aquella que acompañó la transición entre administraciones nunca se reiteraría: el nuevo período de conflictos iniciado hacia mediados de 2000 sería el que culminaría en la insurrección de diciembre y la caída de la convertibilidad.

En efecto, desde mediados de 2000, y particularmente entre octubre de 2000 y marzo de 2001, las luchas sociales se multiplicaron y registraron importantes avances. Los desocupados se ubicaron a la cabeza de esas luchas, multiplicando los cortes de ruta en el interior (Jujuy, Salta, Chubut, San Juan) y realizando durante una semana, a fines de octubre de 2000, un avance decisivo: la primera serie de cortes de los accesos a la Ciudad de Buenos Aires situados a lo largo del cinturón industrial. A estos primeros cortes de los accesos a la capital se sumarían otros nuevos en noviembre y diciembre. Se registraron, además, las primeras grandes acciones de lucha conjunta entre trabajadores empleados y desempleados: el tercer paro general contra el gobierno –sostenido por la CTA y las dos CGT, durante 36 hs., el 23 y 24/11– fue acompañado también por cortes de ruta y ollas populares organizadas por los desocupados.

A fines de 2000, como contrapartida, comenzaba a vislumbrarse ya la

culminación de la crisis económica –el *default* y el colapso financiero– y de la crisis política de la nueva administración –la desintegración de la Alianza y su gobierno. En octubre había renunciado el vicepresidente, Chacho Alvarez, y el resto de los funcionarios del gobierno provenientes del Frepaso comenzaron a retirarse o a ser desplazados de los cargos relevantes. Dentro de la propia UCR, por su parte, las disputas internas se intensificaban con cada nuevo fracaso del gobierno, y el sector encabezado por De La Rúa se encontraba en una situación de creciente aislamiento. La Alianza, en otras palabras, estaba desintegrándose. Las relaciones del gobierno con el PJ, que desde el comienzo había brindado un apoyo parlamentario decisivo a sus principales iniciativas, sufrían las presiones que los permanentes ajustes presupuestarios desataban sobre las provincias gobernadas por justicialistas. Incluso el apoyo monolítico que durante toda la década del 90 había brindado la gran burguesía a la convertibilidad comenzaba a fisurarse. La debilidad política del gobierno era creciente.

También hacia fines de 2000 el estado entraba en un virtual *default*



de su deuda externa. Los propios inversores financieros sancionaban esta insolvencia imponiendo a la emisión de nuevos títulos tasas de interés que significaban, de hecho, la interrupción de todo financiamiento externo. El denominado “riesgo país” comenzó entonces su ascenso incontenible.²⁰ Los organismos financieros internacionales, por su parte, comenzaron a evaluar la posibilidad de que una Argentina en *default* se convirtiera en epicentro de una nueva crisis financiera global. La negociación en diciembre del denominado “blindaje”, un verdadero salvataje *avant-la-lettre*, puso de manifiesto privilegiadamente esta situación de inminente crisis financiera.²¹ Esta creciente incapacidad de continuar con el servicio de la deuda externa era, naturalmente, la modalidad privilegiada en que estaba poniéndose de manifiesto el fracaso de la inserción de la economía argentina en el mercado mundial en condiciones de convertibilidad del peso, así como los ajustes impuestos por la necesidad de servirla serían el campo de batalla privilegiado en la resistencia contra las consecuencias sociales que dicha inserción acarrea.

Los efectos inmediatos del blindaje sobre aquellas tasas de interés se diluyeron ya durante los primeros meses de 2001. Hacia marzo, las políticas de ajuste y el blindaje de Machinea se habían agotado y se impu-

so la necesidad de un nuevo ajuste más profundo y de un nuevo ministro que lo implementara. R. Lopez Murphy, un monetarista auténtico, fue convocado así para imponer su plan de ajuste sin precedentes: un recorte de unos U\$S 2.000 millones para el presupuesto en ejecución y de otros 2.500 millones para el presupuesto del año entrante, que afectaría particularmente a los fondos educativos y provinciales.²² Pero una extraordinaria oleada de luchas sociales acabó tanto con el ajuste como con el ministro en cuestión. Nuevos cortes de ruta y paros docentes culminaron en las movilizaciones y la cuarta huelga general lanzadas por el CTA, la CGT-Moyano y la CCC el 20/3. El nuevo ministro de economía renunciaba así después de escasas tres semanas en funciones. Este acontecimiento adquiere hoy, visto retrospectivamente, su verdadera importancia: la caída del ministro en marzo sería una suerte de “ensayo general” de la caída del que lo reemplazaría y del propio gobierno en diciembre.

El retorno de Cavallo al ministerio de economía marcó un nuevo punto de inflexión. En efecto, Cavallo reasumió el ministerio a la cabeza de su nuevo partido de derecha y dotado de amplios poderes por el parlamento. Esto significaba un intento de reformulación de la alianza gobernante mediante el reemplazo del Frepaso por Acción

por la República. Una serie de cambios en otros ministerios, entre ellos la designación de P. Bullrich a cargo del Ministerio de Trabajo, ratificaría este intento. Y significaba también que el gobierno radical estaba realizando su última apuesta en aras del mantenimiento de la convertibilidad, recurriendo al prestigio que su mentor aún conservaba entre amplios sectores de la población, por una parte, y entre el *establishment* financiero, por la otra. El momentáneo retroceso de las luchas sociales registrado entonces, aunque breve, puso en evidencia que la hegemonía construida en torno a la convertibilidad aún no se había desintegrado completamente.

Pero ese retroceso fue breve. Cavallo anunció inicialmente una serie de medidas de política económica contradictorias, e incluso confusas, que presentó como un programa heterodoxo de recuperación económica. Los llamados “planes de competitividad” –es decir, subsidios a los exportadores– y la “ampliación de la convertibilidad” –la incorporación del euro a la convertibilidad, que implicaba un período de “empalme” con un tipo de cambio devaluado para esos mismos exportadores– fueron las más importantes. Sin embargo, muchas de estas medidas nunca llegarían a implementarse y, en definitiva, Cavallo retomó enseguida el curso de los ajustes permanentes –un nuevo im-

puesto al cheque en mayo, un recorte presupuestario en junio y, finalmente, la denominada “ley de déficit cero” en julio– y debió negociar una amplia reestructuración de deuda externa –el llamado “megacanje”, un masivo canje de títulos que ponía nuevamente en evidencia la situación de *default* y crisis financiera inminente.²³

La mencionada ley de déficit cero, una medida destinada a demostrar disciplina fiscal ante los acreedores externos, es particularmente relevante en este contexto. En efecto, la supresión del déficit público primario implicaba un recorte móvil de salarios nominales del sector público y de jubilaciones, fijado inicialmente en el 13%, la supresión de los incentivos y otras partidas complementarias destinadas a sueldos en la educación, recortes en los subsidios de desempleo y en los presupuestos provinciales, etc. Este nuevo ajuste es particularmente relevante, decimos, porque desataría la oleada final de luchas que culminó en diciembre con el derrumbe de la convertibilidad. La resistencia de los ajustados se mostraría así de hecho, como rezaría la consigna en las calles, como el verdadero límite del ajuste y de la propia convertibilidad.

3. La crisis y la insurrección

La resistencia, en efecto, se intensificaría extraordinariamente desde el lanzamiento de este último ajus-

te. El momentáneo retroceso de las luchas sociales posterior a la reasunción de Cavallo, a fines de marzo, ya se había cerrado hacia mediados de mayo. A la prolongada huelga, las movilizaciones y los cortes de pistas de aterrizaje de los trabajadores de Aerolíneas Argentinas se sumaron los cortes de rutas de pequeños productores agrarios del interior (productores de manzanas de Neuquén, de yerba mate de Misiones) y nuevos cortes de ruta de desempleados. La CTA y la CGT-Moyano, por su parte, lanzaron la quinta huelga general (8/6). Pero el impulso decisivo para esta nueva oleada de luchas sociales provendría un poco más tarde del movimiento de desocupados. A fines de junio se reunió el primer encuentro nacional de organizaciones de desempleados donde distintas agrupaciones acordaron lanzar un plan de lucha escalonado que incluía acciones en las principales ciudades del país. El plan se ma-



terializó en sendas jornadas de cortes de ruta, de 24 y 48 hs., durante las dos primeras semanas de julio, la última de las cuales fue acompañada por un nuevo paro de la CTA. La CTA y los dos sectores de la

CGT lanzaron por su parte la sexta huelga general durante la semana siguiente (19/7). Los desocupados reiniciaron su plan de lucha escalonado con tres nuevas jornadas de cortes de ruta, de 24, 48 y 72 hs., durante la última semana de julio y las dos primeras de agosto, la última de las cuales culminó en una masiva movilización a Plaza de Mayo. Los docentes de distintos niveles, mientras tanto, llevaban adelante una prolongada huelga activa acompañada de numerosas clases públicas y marchas, y los trabajadores públicos de algunas otras dependencias se sumaban a las movilizaciones.

Este nivel de conflictividad alcanzado en julio y agosto carecía de precedentes, por lo menos durante la década de los 90. Hacia fines de agosto, sin embargo, se registraría un nuevo retroceso, que se prolongaría hasta comienzos de diciembre. Por cierto, durante ese lapso se realizaron las elecciones parlamentarias, pero este retroceso momentáneo de las luchas sociales no parece poder explicarse como una tregua característica de los períodos electorales. En las elecciones de octubre se expresaron la crisis y el auge de la resistencia social, naturalmente, pero se expresaron en la forma de una negativa a votar generalizada y de un incremento de los votos obtenidos por los partidos de izquierda. El ausentismo, que ya venía creciendo en elecciones previas, alcanzó un

26,3%. Más significativamente aún, los votos en blanco e impugnados sumaron el 21,1% del padrón. El “voto bronca”, como bautizaron a este fenómeno en su conjunto los medios de comunicación, se constituyó así en la primera fuerza electoral a escala nacional. En consecuencia, la UCR fue ampliamente derrotada en las urnas, pero el PJ triunfante obtuvo menos votos de los que había obtenido cuando fue derrotado en las elecciones previas. Los partidos de izquierda en su conjunto, por su parte, triplicaron sus votos y alcanzaron varios cargos parlamentarios.²⁴

En resumen, el descrédito sufrido por los partidos tradicionales era tan generalizado que, en la conciencia de amplios sectores de la población, las elecciones habían pasado, de ser un medio para escoger nuevos representantes que modificaran el curso político, a ser una ocasión más para manifestar su repudio. El resultado de las elecciones podía resumirse así en un “que se vayan todos” anticipado. El retroceso de las luchas sociales registrado durante ese lapso, en cambio, pareció haber respondido más bien a una desmoralización momentánea respecto de los resultados alcanzados a través de la oleada de luchas sociales de julio y agosto. El ajuste del déficit cero no había podido ser derrotado. El gobierno, acorralado por la resistencia, había empleado todos sus

mecanismos de presión discursiva y represiva: había intentado aislar la resistencia de los trabajadores públicos cargando sobre sus supuestos “privilegios” la responsabilidad de la crisis, aislar los cortes de rutas de los desempleados amenazando con reprimir si no permitían la circulación de vehículos, etc.

Sin embargo, la situación volvió a modificarse desde comienzos de diciembre. La crisis económica y política no había retrocedido sino que, más bien, se había profundizado. La crisis financiera, en un marco de moneda convertible, se expresa como crisis bancaria. Las fugas de depósitos diezmaron así las cuentas, tanto en pesos como incluso en dólares, por un monto que ascendía a U\$S 18.371 millones durante el año y a U\$S 4.937 millones sólo durante noviembre.²⁵ Las fugas de dólares al extranjero por parte de los grandes especuladores se estimaron en unos U\$S 15.000 millones durante el año, 3.000 millones de los cuales habían dejado el país



durante noviembre. Mientras el sistema bancario se reducía de esta manera en más de una cuarta parte, sin embargo, Cavallo se empeñaba en asegurar que “el valor del peso” y “la intangibilidad de los depósitos” estaban garantizados. Pero el 1 de diciembre se decretó el congelamiento de los depósitos (el denominado “corralito”) por tres meses.²⁶ Una multitud de algo más de un millón y medio de pequeños ahorristas, con depósitos inferiores a los U\$S 25.000 (un monto equivalente al precio de un departamento de un ambiente estándar en Buenos Aires, a valores previos a la caída de la convertibilidad) quedaba así imposibilitado de disponer de su dinero.²⁷ Se trata de ahorros acumulados durante años de trabajo, percibidos en concepto de indemnización por despido, provenientes de la venta de alguna propiedad, cuyo interés en muchos casos ayudaba a sobrevivir a las familias mientras se reinsertaban en el mercado de trabajo o complementaba sus misérrimas jubilaciones. Y estas restricciones afectaban asimismo a las cuentas de sueldos. La brutal iliquidez generada por la medida profundizaba entonces la caída del consumo, que afectaba particularmente a los pequeños comerciantes que operan en efectivo, y la precariedad de los trabajadores en negro, que perciben su salario en efectivo.²⁸ Pero la amenaza de *default* de la deuda externa tampoco retrocedía. Ca-

vallo concretaría en diciembre la primera fase de un nuevo canje de títulos de la deuda externa por un monto récord de arriba de U\$S 50.000 millones, mientras el riesgo país ascendía ya a entre 3300 y 3500 puntos básicos.²⁹

Este congelamiento de depósitos dispararía, en gran medida, la movilización de los denominados “sectores medios”. Durante la primera semana de diciembre se multiplicaron el malestar y las protestas de la gente que acudía a los bancos. La CTA y las dos CGT convocaban a su séptima huelga general. El 11 y 12 de diciembre, pequeños comerciantes lanzaron sus primeros apagones y cacerolazos en la capital, el Gran Buenos Aires, Rosario y otras ciudades del interior. La huelga general por 24 hs. del 13 de diciembre, por su parte, sería muy significativa porque acaso haya sido la más masiva registrada durante el período y porque contó con una amplia adhesión de esos mismos sectores medios.

Mientras tanto, la crisis y las presiones en el sentido de un ajuste aún mayor se intensificaron. Cavallo negoció así con el FMI el desembolso de créditos pendientes a cambio de un nuevo recorte de entre U\$S 3.000 y 4.000 millones para el presupuesto de 2002, pero los funcionarios del FMI retaceaban su apoyo porque dudaban de la capacidad política del gobierno de im-

poner semejante ajuste.³⁰ El gobierno, en efecto, no contaba para implementarlo ni siquiera con el apoyo parlamentario de la UCR y el PJ, renuentes al verdadero suicidio político que implicaba. El gobierno postergaba entonces el pago de las jubilaciones y amenazaba con aumentar el porcentaje del recorte de sueldos y jubilaciones y con suprimir los aguinaldos, mientras el riesgo país ya superaba su nueva frontera de los 4.000 puntos.

A esta altura de la crisis había quedado en evidencia que la salida deflacionaria, a diferencia de lo sucedido en 1994-95, estaba fracasando. La profundidad de la crisis carecía de precedentes. El producto había caído un 7,5% durante la crisis 1999-2001 en conjunto, un 3,8% solamente en el 2001, contra un 4,2% en la crisis de 1994-95. Los índices de utilización de la capacidad instalada habían caído permanentemente y ya se ubicaban en 65,5% promedio en 2001, contra 74,5% en 1995. La inversión había retrocedido un 44,8% durante la crisis, contra un 16% en 1995. La formación bruta de capital fijo se había reducido entonces un 32,2%, contra 13% en 1995. La tasa de desempleo de octubre de 2001 había alcanzado el récord del 18,3%, superior al 18,4% registrado en mayo de 1995, empero, porque también había retrocedido la tasa de actividad. La tasa de subempleo, mientras tanto, había

venido creciendo constantemente hasta afectar a un 16,3% en octubre de 2001, contra el 11,3% registrado en mayo de 1995. Más de un tercio de la PEA, entonces, se encontraba marginada del empleo por el proceso de destrucción de puestos de trabajo. Los índices de inflación, por su parte, habían sido negativos durante todos los años de la crisis, registrándose una deflación acumulada de alrededor del -4%, mientras que el índice de inflación de 1995 había sido del 1,6%. La cantidad de dinero circulante, como señalamos antes, se había reducido en un 35% y los depósitos en otro 27%. Los índices de bolsa se habían derrumbado a un tercio del nivel alcanzado antes del inicio de la crisis (33,4 con base 1997=100).

La balanza de pagos registraba un déficit récord de \$ 19.800 millones, es decir, un 15% del producto. Si bien los déficits de cuenta corriente se habían reducido a causa de la contracción de las importaciones (a 5.301 millones), se había sumado a ellos un inmenso déficit de cuenta capital (de 14.499 millones) derivado de un masivo reflujo de capitales (una transferencia neta de recursos al extranjero de 13.099 millones). La deuda externa había devenido completamente imposible de servir: la razón deuda externa desembolsada / exportaciones ascendía a 451%, la peor de las latinoamericanas, y los mercados de bonos

habían cerrado sus puertas al estado argentino (se colocaron apenas U\$S 1.501 millones en 2001, contra 13.024 y 14.183 millones en 2000 y 1999).³¹ La salida deflacionaria, entonces, ya revestía una ferocidad sin precedentes y aún no alcanzaba sus objetivos. La resistencia social, sin embargo, pronto le pondría un límite.

El 15 de diciembre tuvieron lugar los primeros copamientos de supermercados: un Carrefour del Gran Buenos Aires fue asaltado por una organización del movimiento de desempleados y, durante varios días, se sumaron otros grandes supermercados de Mendoza y Rosario. El 17, nuevamente, comerciantes y vecinos de la capital y el Gran Buenos Aires se manifestaron cortando calles. El 18 se reiteraron los asaltos a los supermercados del Gran Buenos Aires y la guardia de infantería comenzó a custodiar los accesos a los mismos.

Ya estaban presentes en ese momento todos los componentes de la insurrección popular que acabaría con la administración, la convertibilidad y la propia hegemonía menemista unos días más tarde. El 19 de diciembre se generalizaron los copamientos a los grandes supermercados (Capital y Gran Buenos Aires, La Plata, Rosario, Santa Fe, Entre Ríos, Tucumán, Río Negro), con enfrentamientos con la policía, muertos y numerosos heridos y de-

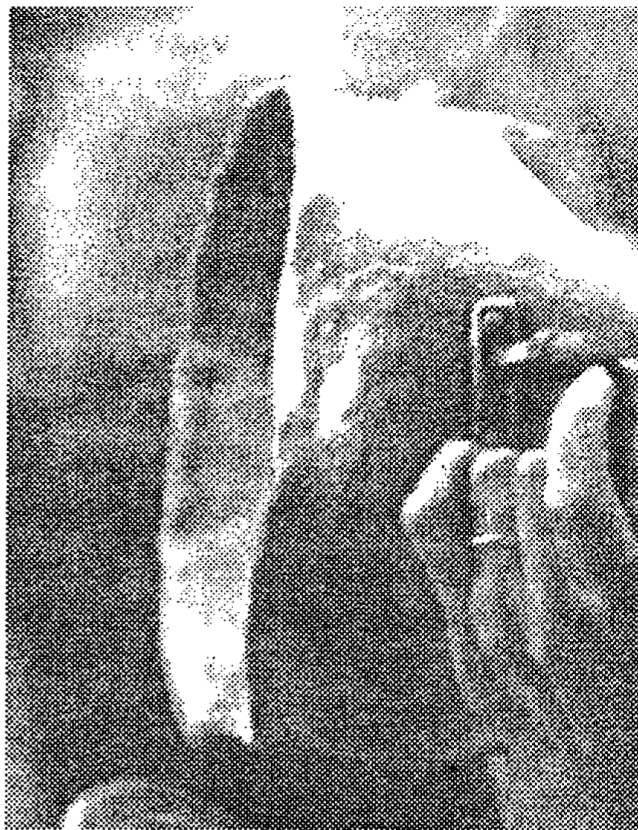
tenidos. En respuesta, todos los ministros, incluido Cavallo, presentaron sus renunciaciones y De La Rúa decretó el estado de sitio. Pero la respuesta popular a la suspensión de las garantías constitucionales, lejos del terror que acaso hubiera podido preverse habida cuenta de la tradición de golpes de estado y de dictaduras militares genocidas que pesa sobre el pueblo argentino, fue un aumento de la resistencia. Las masas se movilizaron hacia los centros de los distintos barrios en un “cacerolazo” y, poco a poco, avanzaron sobre la Plaza de Mayo, desafiando al gobierno y su estado de sitio. Tampoco los enfrentamientos con la policía en Plaza de Mayo acabaron con la movilización. Una vanguardia de los movilizados enfrentó a la policía e incendió el Ministerio de Economía y otros edificios públicos, mientras el resto se replegaba hacia Plaza Congreso. El 20 sería la jornada de resistencia más radicalizada. Miles de manifestantes ocuparían el centro de la Ciudad de Buenos Aires durante toda la jornada, acercando los piquetes al corazón de la *city* financiera, atacando los edificios de los bancos, las empresas privatizadas, las oficinas públicas, los MacDonalds y otros tantos símbolos del poder, enfrentándose a la policía con sus piedras y sus palos, con nuevos muertos, heridos y detenidos. Y un nuevo cacerolazo se sucedió por la noche, pe-

ro para festejar esta vez la caída del gobierno.

4. Consideraciones finales

Ahora es preciso que nos detengamos un momento en algunas consideraciones más generales acerca de la explicación de este proceso de resistencia social y crisis de la convertibilidad y acerca de sus perspectivas.

1. Comencemos con un análisis de los sujetos sociales intervinientes. En los hechos de diciembre confluyeron de hecho varios sujetos sociales que se habían consolidado como tales, cuando menos, durante la segunda mitad de la década de los 90. Los altos niveles de desocupación y subocupación generados por la convertibilidad, que afectaban sumados a más de un tercio de las mujeres y los hombres en condiciones de trabajar, combinados con una incapacidad del estado para implementar un verdadero sistema de subsidios de desempleo que se incrementaba con cada nuevo ajuste, sustentaron la emergencia y la creciente organización y combatividad del movimiento de trabajadores desocupados. El llamado “movimiento piquetero” es, seguramente, uno de los fenómenos más interesantes y originales de la Argentina contemporánea y jugó un papel decisivo en la insurrección de diciembre y, en particular, en sus momentos de mayor radicalización. Se trata,



en cuanto a su origen social, de un movimiento de desocupados emergente de la destrucción de puestos de trabajo resultante de la privatización de empresas públicas, en un comienzo, y de la propia reconversión de empresas privadas más adelante, y que fue consolidándose desde mediados de los 90. Desde un punto de vista organizativo está compuesto por una diversidad de organizaciones locales, sean barriales o poblacionales, que en algunos casos fueron integrándose a movimientos nacionales (la CCC, la FTV-CTA) y, hacia fines de 2001, se coordinaron a escala nacional (en las Asambleas Nacionales de Organizaciones Territoriales, Sociales y de Desocupados, llamadas “congresos piqueteros”). Estas organizacio-

nes y sus congresos funcionan a través de una democracia directa asamblearia, aunque militantes independientes o pertenecientes a partidos de izquierda o a sindicatos suelen desempeñar un papel importante. Las organizaciones descansan normalmente sobre la percepción de los subsidios de desempleo y la decisión colectiva acerca de su uso, pero también sobre el tejido de una amplia y polifacética red de actividades auto-organizadas (ocupación de tierras, trabajo comunitario, trueque, comedores y guarderías, talleres de formación, etc.). El eje de su modalidad de lucha se encuentra, por supuesto, en el piquete. Los primeros piquetes tuvieron lugar, hacia 1996, en una serie de importantes rutas del interior que comunican el Mercosur (Cutral-Có y Plaza Huincul en Neuquén, Tartagal y Gral. Mosconi en Salta, Ledesma en Jujuy) y se nutrieron de los trabajadores que habían perdido sus puestos de trabajo debido a las privatizaciones y de sus familias. Pero paulatinamente estos piquetes fueron avanzando hasta terminar cerrando los accesos a la capital desde el Gran Buenos Aires y volcándose a las calles de la propia *city* financiera porteña. La modalidad de lucha del movimiento piquetero está signada así por su dimensión espacial: impedidos de detener la producción, los trabajadores sin empleo se ven obligados a interrumpir las vías de

circulación.³² Pero también los desocupados jugaron a menudo un papel clave en las acciones directas más radicalizadas, cuyos antecedentes más lejanos se encuentra en el "santiagazo" (los ataques a las sedes de los tres poderes de Santiago del Estero a fines de 1993) y en otras "puebladas" (La Rioja en 1993, Salta y Jujuy en 1994, etc.). Las acciones del movimiento piquetero no dejaron de aumentar y de acercarse a la Ciudad de Buenos Aires durante el todo el período que consideramos y fueron un componente decisivo de la insurrección de diciembre.³³

Los trabajadores del sector público ya habían desarrollado importantes jornadas de lucha a comienzos de los 90, es decir, durante el período de la administración menemista en que tuvieron lugar la mayor parte de las privatizaciones. A pesar de la derrota impuesta por el menemismo a estas luchas, los trabajadores públicos, principalmente los nucleados en la CTA, volverían a protagonizar importantes luchas durante el período que nos interesa. Los trabajadores del estado fueron las víctimas más inmediatas de los sucesivos ajustes, puesto que éstos implicaban la reducción generalizada de sus salarios, la supresión de otros de sus ingresos para-salariales (caso del sistema de incentivos docentes), el deterioro de sus condiciones de trabajo (en escuelas, hos-

pitales, etc.) y despidos (como en el caso de los empleados públicos provinciales). Desde luego, los ajustes también afectaron a los trabajadores del sector privado, aunque de una manera más indirecta: a través del recorte de los servicios sociales y, menos perceptiblemente quizás, a raíz de que la reducción de los sueldos públicos potenciaba la ofensiva que las patronales privadas venían desarrollando desde comienzos de la recesión hacia la reducción de salarios en el sector privado. Sin embargo, golpeados por el desempleo, por la precarización de los contratos y condiciones de trabajo y por el más brutal despotismo patronal en los lugares de trabajo durante toda una década, sometidos a las centrales sindicales más burocráticas y comprometidas con las políticas neoconservadoras de los sucesivos gobiernos (la CGT-Daer y, aunque en menor medida, la CGT-Moyano), no intervendrían decisivamente, de manera organizada, en la insurrección de diciembre.³⁴ Esto es importante y merece ser precisado. Los trabajadores del sector privado intervendrían a través de las huelgas generales y las movilizaciones organizadas por esas centrales sindicales, que presionaban así para negociar a continuación con el gobierno, la iglesia, los empresarios y los partidos burgueses un "acuerdo nacional" que preservara la gobernabilidad —recuérdese

se que las mismas apoyaron incondicionalmente a A. Rodríguez Sáa como presidente interino hasta que fue derrocado, una semana después de haber asumido, por nuevas movilizaciones populares.) E intervendrían, desde luego, en los copamientos de los supermercados, las movilizaciones, los enfrentamientos con la policía. Sin embargo, no pudieron intervenir organizada y colectivamente de manera más decisiva, por ejemplo a través de la ocupación de fábricas, como en otras ocasiones de la historia argentina.

Los denominados "sectores medios", finalmente, desempeñarían un papel decisivo en la insurrección, pero su análisis es mucho más complejo. Una parte de esta complejidad deriva, naturalmente, de que esos sectores medios no son una clase social, sino un agregado de individuos provenientes de distintas clases que comparten cierto nivel de vida y ciertos valores culturales e ideológico-políticos. Una parte importante de esos sectores medios está integrada también por trabajadores asalariados del sector público o privado (profesionales, técnicos, académicos), pero que trabajan y viven en condiciones relativamente mejores que los restantes trabajadores. En tanto tales, fueron afectados por los sucesivos ajustes, por el desempleo, las reducciones de salarios y los recortes de gastos

sociales, de una manera semejante al resto de los trabajadores. Pero hay algunas condiciones más específicas. Puede decirse, en primer lugar, que los ingresos de estos sectores habían sido particularmente afectados por algunas de las medidas incluidas en los últimos ajustes, como los impuestos al consumo o los recortes de sueldos por encima de cierto monto. En segundo lugar, la propia recesión había afectado masivamente a un sector importante de dicha clase media: los pequeños comerciantes, los cuentapropistas vinculados a distintos servicios, los profesionales independientes. Los sectores medios fueron, en tercer lugar, las principales víctimas del congelamiento de los depósitos. Es así como estos sectores, que en buena medida habían sustentado el triunfo electoral de la Alianza dos años antes, se sumaron con sus cacerolazos espontáneos y masivos a la resistencia contra su gobierno. Esa modalidad de lucha tenía algunos antecedentes, como el cacerolazo contra Menem de 1999, pero no respondió a ninguna organización previa. Recién a partir de enero de 2002, mediante las asambleas vecinales realizadas en las plazas de los distintos barrios, estos sectores medios comenzaron a organizarse. El extraordinario avance registrado por esta organización de los sectores medios durante los últimos meses, sin embargo, ya los está posicio-

nando como un sujeto social organizado en un plano de igualdad con otros.

2. Este análisis de los sujetos sociales intervinientes en las jornadas de diciembre nos permite, a su vez, comprender mejor las características de la insurrección misma. En efecto, estos distintos sujetos sociales confluirían en la insurrección de diciembre y se expresarían en las distintas modalidades de lucha que se desarrollaron y en las distintas demandas que se plantearon.³⁵

Los asaltos a las grandes cadenas de supermercados fueron acciones protagonizadas por trabajadores desocupados y ocupados. Sus antecedentes se remontan a 1989, es decir, a los asaltos a los supermercados causados por los despidos y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios resultantes de la hiperinflación. Pero si en aquella oportunidad los asaltos a los supermercados habían sido acciones desesperadas realizadas en un marco de derrota de los trabajadores, en esta nueva ocasión tendió a perfilarse como un verdadero desafío de la propiedad privada a través de la apropiación directa. Las grandes corporaciones de medios de comunicación de masas locales (como el Grupo Clarín) y extranjeras (como la CNN) y, por otro lado, las intervenciones de grupos de derecha fascizantes de escasa relevancia (como los “carapintadas” bonaerenses), tergiversaron

en gran medida la naturaleza de estas acciones. No se trató en absoluto de un enfrentamiento de pobres contra pobres, es decir, de una oleada de vandalismo dirigida contra toda suerte de locales comerciales y casas de familias. Se trató fundamentalmente del asalto a las grandes cadenas de supermercados propiedad de grandes empresas multinacionales (como Carrefour o Wal Mart) y nacionales (como Coto) y, en el caso de casas de familia, de un avance no concretado sobre los country-clubs de la zona norte del Gran Buenos Aires.

Los cacerolazos fueron, como señalábamos, la modalidad de lucha privilegiada de los sectores medios y, precisamente, fueron más masivos en los barrios característicos de la clase media capitalina (Belgrano, Palermo; Flores, Caballito). Estos cacerolazos serían acciones claves para la caída del gobierno porque pondrían de manifiesto que esos sectores medios, que conservan una importancia y una influencia político-ideológica decisiva en la sociedad argentina y que habían sustentado a la Alianza, habían retirado definitivamente su apoyo al gobierno.

Las acciones directas de violencia callejera, desarrolladas particularmente durante la jornada del 20, sin embargo, serían sin duda las acciones más radicalizadas y sin las cuales el gobierno no hubiera caído. Pero

la naturaleza de estas acciones también fue tergiversada por los medios masivos de comunicación, que las presentaron como irracionales actos de vandalismo.³⁶ La violencia ejercida en las calles fue una violencia colectiva, ciertamente de una vanguardia del movimiento, compuesta por piqueteros, estudiantes, miembros de partidos de izquierda y otros militantes sociales, pero de ninguna manera de saqueadores dispersos. Cuando se trató de una violencia ejercida sobre otras personas, se trató siempre de una violencia que tenía a la policía como contendiente y que respondía a la represión y a las provocaciones ejercidas por la misma contra los manifestantes. Cuando se trató de una violencia ejercida contra bienes físicos, se trató casi sin excepción de una violencia notoriamente selectiva ejercida contra los símbolos materiales del poder: los edificios de los bancos privados y públicos que habían expropiado los ahorros, los edificios y vehículos de las empresas de servicios públicos privatizadas y en manos de grandes multinacionales que habían saqueado a los consumidores con las tarifas más altas del mundo, los locales de MacDonalds que ya se habían constituido en un símbolo del capital global, los edificios públicos que representaban al estado.³⁷

Pero la confluencia de todos estos sujetos sociales y sus modalidades de lucha puso en escena así, du-



rante la insurrección de diciembre, una nueva fuerza social. Me refiero a la constitución, en la lucha misma, de una nueva alianza entre los trabajadores empleados y desempleados y los sectores medios. Difícilmente pueda exagerarse la importancia de esta alianza. Téngase en cuenta que en numerosas ocasiones, durante la década del 90, los sectores medios desempeñaron socialmente un papel conservador, aliándose de hecho con la gran burguesía, y se expresaron política e ideológicamente a través de partidos de centro-izquierda que operaron como valiosos “mediadores evanescentes” para la continuidad del régimen.³⁸ Téngase en cuenta, por ejemplo, que apenas unos días antes de la insurrección de diciembre la mayor parte de esos sectores medios era contraria a los cortes de ruta desarrollados por los piqueteros. Sin embargo, su incidencia social, política e ideológica sigue siendo tan importante en la sociedad argentina que cualquier transformación en un sentido anti-capitalista es inconcebible sin una alianza entre los trabajadores y esos sectores medios. Esta alianza, aunque no puede asumirse sin más como un

dato, comenzó a gestarse durante la insurrección de diciembre –e incluso siguió profundizándose a partir de entonces. La burguesía es consciente de esto y, a través de sus dirigentes políticos, sus intelectuales y sus medios de comunicación, no ahorra esfuerzos para romper dicha alianza, mientras que su consolidación política sigue siendo una de las tareas claves para los trabajadores. Pero en la insurrección se puso en escena también una nueva vanguardia. Una vanguardia numerosa integrada por militantes muy combativos, independientes algunos, pertenecientes otros a partidos de izquierda, organizaciones de desocupados o de derechos humanos, sindicatos o agrupaciones estudiantiles, cuya característica compartida es su juventud y uno de cuyos rasgos sobresalientes es la importante presencia de las mujeres entre sus filas. Esta nueva vanguardia desempeñará, seguramente, un papel protagónico en las luchas por venir.

En la insurrección de diciembre, junto con estos distintos sujetos y modalidades de lucha, también confluyeron distintas demandas, desde las demandas de alimentos, pasando por los reclamos de trabajo o de subsidios de desempleo, hasta las exigencias de devolución de los depósitos incautados o de castigo a los políticos y jueces corruptos. Hubo, sin embargo, una consigna que fue imponiéndose poco a poco como un

punto de convergencia de esas demandas: la exigencia de que renunciaran los responsables del régimen vigente en su conjunto o, más simplemente, de "que se fueran todos". Más abajo volveremos sobre esta consigna que iría ganando terreno hasta imponerse casi exclusivamente en la jornada del 27 de diciembre, cuando las masas salieron nuevamente a las calles para exigir la renuncia de Rodríguez Saá.

3. Revisemos ahora brevemente los alcances y las limitaciones, las perspectivas, de esta insurrección. Puede afirmarse que la insurrección de diciembre puso fin a un período de la lucha de clases en la Argentina: el sombrío período de ofensiva del capital que, estructurada alrededor del modelo de la convertibilidad, signó de conjunto la década de los 90. Las consecuencias de la ofensiva neoconservadora de los 90 (la reforma del estado, la apertura de la economía, la precarización de los contratos y condiciones de trabajo, el desempleo), naturalmente, siguen presentes y su importancia no debe menospreciarse. Pero la clave de dicha ofensiva, la punta de lanza del modelo neoconservador específico que se impuso durante los 90, es decir, la convertibilidad del peso, cayó irreversiblemente. Si a comienzos de los 90 la convertibilidad había impuesto nuevas reglas de juego disciplinarias para el desenvolvimiento de la lucha de clases

y una nueva hegemonía, esas reglas de juego fueron cada vez más desbordadas por las luchas sociales y esa hegemonía fue perdiendo sustento entre sectores cada vez más amplios de la población hacia fines de la década.

Pero ¿cómo podemos explicar esta desintegración? La respuesta no va de suyo. La convertibilidad significó, como señalamos, un férreo mecanismo de disciplinamiento social. La convertibilidad gozó de un amplio consenso pasivo entre extendidos sectores de la sociedad.³⁹ La convertibilidad, en definitiva, fue la clave de bóveda de una hegemonía social y política bastante duradera. Una explicación de la desintegración de esta hegemonía, aunque preliminar, descansa a nuestro entender en dos elementos claves: la marginalización respecto de las reglas de juego vigentes y la violación de dichas reglas de juego. En efecto, por una parte, sectores cada vez mas amplios de la sociedad se encontraron marginados de las reglas de juegos impuestas por la convertibilidad. El caso paradigmático es la creciente masa de trabajadores desempleados que no tenía nada que perder con el derrumbe de la



convertibilidad porque no percibía salarios cuyo poder adquisitivo conservar. Por otra parte, sectores de la sociedad incluidos en las reglas de juego de la convertibilidad se vieron repentinamente enfrentados a acontecimientos que aparecieron ante su conciencia como una violación flagrante de esas reglas de juego perpetrada por parte de la propia burguesía. El caso paradigmático es, desde luego, el de los sectores medios cuyos ahorros fueron congelados y expropiados en el sistema bancario. En fin, entre ambas situaciones, extremas y extremadamente explosivas, hay una gama de situaciones intermedias. Tal es el caso de los trabajadores empleados cuyos salarios nominales caían con las tendencias deflacionarias desatadas por la convertibilidad durante la crisis. Estos podían verse marginados de las reglas de juego de la convertibilidad, en la medida en que la estabilidad dejaba para ellos de representar la conservación del poder adquisitivo de sus salarios y pasaba a significar el deterioro de los mismos en un marco deflacionario. Pero estos trabajadores podían también ver violadas las reglas de juego inherentes a la convertibilidad en la medida en que dichas reglas, establecidas durante el auge, habían vinculado explícitamente aumentos de salarios con aumentos de la productividad del trabajo (vínculo que, por cierto, se efectivizó

en muy contadas excepciones) pero en ningún caso descensos de salarios con condiciones de crisis.

El derrumbe de la convertibilidad inauguró, en este sentido, nuevas reglas de juego para la lucha de clases. Pero podemos avanzar mucho más en ese sentido. La caída de la convertibilidad constituyó indudablemente una victoria para el conjunto de los explotados y oprimidos del país. Esta afirmación vale en dos sentidos. En un sentido inmediato porque significó, como decíamos, el cierre de unos de los períodos más reaccionarios de la historia argentina. En un sentido más duradero, porque la experiencia de organización y lucha desarrollada por las masas durante estas jornadas, la confianza en sí mismas en tanto sujeto social capaz de cambiar el curso de los acontecimientos y, más aún, esa prefiguración de la libertad por venir que aparece cuando las masas avanzan por las calles y los poderosos huyen, todas estas cosas quedan guardadas celosamente en la memoria colectiva para nutrir las nuevas insurrecciones de hoy y de mañana. Lo primero no significa sin más que se haya inaugurado un período de conquistas para los trabajadores ni que la burguesía haya cejado en su ofensiva. La propia caída de la convertibilidad, la devaluación del peso, amenaza con convertirse en un nuevo mecanismo de expropiación masiva

de los trabajadores, la eventual devolución de depósitos incautados acarrearía una expropiación de no menos de la mitad del valor de los mismos, y así sucesivamente. Las victorias de los trabajadores en la lucha de clases no suelen expresarse directamente como tales sino, de una manera perversa, como crisis capitalistas que a su vez acarrearán nuevos sufrimientos a los trabajadores. Pero no por eso dejan de ser victorias. La inédita ofensiva desarrollada por el capital durante una década entera ha concluido con la insurrección de diciembre y esto es una victoria del trabajo. Pero lo segundo implica, además, que las relaciones sociales de fuerza son ahora mucho menos favorables al capital para relanzar dicha ofensiva por otros medios. Las vacilaciones, las concesiones, las marchas y contramarchas del nuevo gobierno provisional de E. Duhalde no hacen sino poner en evidencia que los representantes de la burguesía aprendieron, después de sacrificar dos administraciones, que esas relaciones de fuerza cambiaron. También los trabajadores están aprendiéndolo.

4. Ahora bien, la insurrección de diciembre fue predominantemente negativa: “que se vayan todos”, exigieron las masas en las calles. Pero uno puede preguntarse a esta altura y para finalizar: ¿qué alternativa propusieron? ¿qué gobierno, qué políticas, qué modelo de economía,

de estado, de sociedad reclamaron? No puede darse ninguna respuesta sencilla a estas preguntas. Algunos de los insurrectos reclamaron alimentos o ropa, otros un trabajo o un pequeño subsidio de desempleo, otros que se acabara la corrupción enquistada entre los políticos del régimen o que se fueran los políticos corruptos, otros que se terminaran los ajustes o que se tomaran medidas distintas ante la crisis, otros que renunciara el ministro de economía y algunos otros funcionarios o bien que se fuera el gobierno completo, otros, ciertamente, que se acabara el propio capitalismo. Algunos de estos reclamos fueron más generalizados que otros y algunos se inspiraron en posicionamientos ideológico-políticos más radicalizados que otros. Recién en asambleas barriales y otras instancias posteriores a la insurrección empezarían a decantar algunos pliegos, aunque embrionarios, de reclamos compartidos. Pero ninguno de estos fenómenos puede sorprendernos: todos los auténticos movimientos de masas son diversos, e incluso contradictorios, y van creando sus programas a partir de sus propias acciones de lucha.

Más sorprendente parece, en cambio, su carácter predominantemente negativo: “que se vayan todos, que no quede ni uno sólo”. Pero debemos ser muy cuidadosos en el análisis de este carácter negativo. Desde diciembre, los voceros de la burgue-

sía no se cansan de preguntarse y preguntar retóricamente a las masas, algo inquietos por cierto en medio de los escraches, acerca de qué gobierno, qué políticas, qué estado quieren los insurrectos. Esta pregunta es en realidad un chantaje porque en todos los casos supone, implícitamente, que las masas deben escoger del menú que la burguesía intenta poner previamente en su mesa. ¿Quieren un gobierno, unos ministros, unos jueces del PJ, de la UCR o del ARI? ¿Quieren convertibilidad o flotación cambiaria? ¿Quieren que respondamos a la banca y a las empresas privatizadas, o bien a los esforzados industriales, o acaso a los terratenientes de siempre? ¿Quieren un estado mínimo neoliberal o un estado regulador neopopulista? Pero las masas, con una suerte de sabiduría instintiva, parecen empecinadas en seguir guardando silencio ante estas preguntas. Ni siquiera parecen dispuestas a avenirse a responderlas a través de los canales del régimen, es decir, ni siquiera reclaman la realización de comicios para elegir nuevos representantes. Pero en este sentido, paradójicamente, ese rasgo negativo de la insurrección de diciembre es extraordinariamente positivo. La consigna “que se vayan todos”, con su inconsistencia o, mejor aún, con su naturaleza aporética, dejó abierta una brecha inédita para construir una política por y de los trabajadores independiente de los partidos y representan-

tes del régimen, para conformar nuevas formas de auto-gobierno sin gobierno externo, de auto-organización sin ningún estado, de comunidad, en definitiva, sin comando capitalista. Esta es nuestra apuesta.

Buenos Aires, enero de 2001

Notas

¹ Para una historia de la inflación argentina puede consultarse, entre otros, G. Vitelli: *Cuarenta años de inflación en la Argentina: 1945-1985*, Bs.As., Legasa, 1986. El predominio casi exclusivo de las tradiciones monetarista y estructuralista de interpretación de la inflación operó durante ese período como un auténtico “obstáculo epistemológico” ante el mencionado vínculo entre inflación y lucha de clases; la principal excepción se encuentra en O. Braun (comp.) (1973): *El capitalismo argentino en crisis*, Bs.As., Siglo XXI, 1973.

² A propósito de esta noción de “acumulación originaria reiterada”, véase W. Bonefeld: “Class struggle and the permanence of primitive accumulation”, en *Common Sense* 5, Glasgow, 1988.

³ Los procesos hiperinflacionarios a los que me refiero son: el que ocasiona la caída del “Plan Primavera” y del gobierno de Alfonsín, iniciado en febrero de 1989 y prolongado hasta julio, el que comienza en diciembre de 1989 y termina en marzo de 1990 poniendo fin a los acuerdos de precios del “Plan Bunge y Born”, y el que se esboza hacia fines de 1990, coronando los meses de grandes conflictos de los “Planes Erman”, y es abortado por el lanzamiento del “Plan de Convertibilidad” en marzo de 1991. El primero es el más grave y, seguramente, el más importante en cuanto a sus consecuencias sociales y políticas: los precios aumentaban a diario (114% en junio y 199% en julio

de 1989), la capacidad adquisitiva de los salarios se deterioraba aceleradamente (el salario real descendió un 35% acumulado entre abril y julio) y el desempleo se disparaba hasta niveles inéditos (15% en mayo). Fue entonces cuando numerosos trabajadores se lanzaron a saquear supermercados para alimentar a sus familias.

⁴ En efecto, el costo laboral unitario relativo (CLUR) puede entenderse como un compuesto del salario unitario (w/L), la productividad del trabajo (q/L) y el tipo de cambio (r), esto es, $CLUR = [(w/L).(q/L).r]$ y ser fácilmente reconducido a la teoría del valor-trabajo. Remito en este sentido a A. Shaikh: "The laws of international exchange", en E. J. Nell (comp.): *Growth, profits and property*, Cambridge, Cambridge University Press, 1980; "Foreign trade and the law of value", I y II, *Science and Society*, fall 1979 y Spring 1980, y a D. Guerrero: *Competitividad: teoría y política*, Barcelona, Ariel, 1995.

⁵ Esta relación entre niveles de explotación del trabajo y movimientos internacionales de capitales reviste, naturalmente, una complejidad mucho mayor a la que podemos sugerir en estas páginas: véase A. Bonnet: "The command of capital-money and Latin American crises", a publicarse en W. Bonefeld (ed.): *What is to be done? The anniversary of a question*, Londres, Macmillan, 2002.

⁶ El promedio mensual de conflictos aumenta entre 1991 y 1994 (de 79 a 98), debido a las luchas de los trabajadores del sector público, para retroceder luego hasta ubicarse en torno a una media de 60 conflictos mensuales hasta el 2000. El porcentaje de los conflictos defensivos (por despidos, atrasos salariales) aumenta constantemente, por su parte, hasta explicar entre el 80 y el 100% de los mismos hacia el final del período (M. Gómez: "La conflictividad laboral durante el plan de convertibilidad (1991-1995)", en *Cuadernos del Sur* 22/23, 1996; A. Piva: "La década perdida. Tendencias de la conflictividad obrera frente a la ofensiva del capital (1989-2001)", en *Cuadernos del Sur* 32, 2001). Más adelante nos referiremos a algunos indicadores de la tasa de explotación.

⁷ El número anual de concursos preventi-

vos y quiebras casi se duplicó durante los primeros años de la convertibilidad, pasando de 772 en 1991 (con 694 en 1990 y 762 en 1989) a 1400 en 1994. La recesión de 1995 volvió a elevarlo abruptamente a 2279 y desde entonces hasta el 2001 el promedio anual de bancarrotas se estabilizó en torno a las 2464 anuales (en base a datos del MEyOSP). Más adelante nos referiremos a algunos indicadores de la reconversión productiva.

⁸ Las mejores exposiciones de esta interpretación se encuentran en varios trabajos recientes de E. Basualdo: *Sistema político y modelo de acumulación en la Argentina*, Bs.As., UNQ-Flacso-IDEP, 2001; *Concentración y centralización del capital en la Argentina durante la década de los noventa*, Bs.As., UNQ-FLACSO-IDEP, 2000; y *Acerca de la naturaleza de la deuda externa y la definición de una estrategia política*, Bs.As., UNQ-FLACSO-Página/12, 2000. Su influencia ideológico-política va de suyo: sobre ella descansa el discurso del CTA, del FRENAPO y, eventualmente, de un nuevo reciclaje del centro-izquierdismo autóctono encabezado por E. Carrió.

⁹ Para una exposición más detallada de estos mecanismos que sustentaron la hegemonía menemista durante los 90 véase A. Bonnet: "Argentina 1995: ¿una nueva hegemonía?", en *Cuadernos del Sur* 19, 1995.

¹⁰ Para interpretaciones de las políticas neoconservadoras acordes con nuestra perspectiva véanse entre otros, particularmente, W. Bonefeld: *The recomposition of the British state during the 1980's*, Aldershot, Dartmouth, 1993; J. Holloway y W. Bonefeld (eds.): *Global capital, national state and the politics of money*, Londres, Macmillan, 1995; J. Holloway: *Marxismo, estado y capital*, Bs.As., Tierra del Fuego, 1994; S. Clarke: *Keynesianism, monetarism and the crisis of the state*, Aldershot, Edward Elgar, 1988.

¹¹ Remito nuevamente a A. Shaikh: "Real exchange rates and the international mobility of capital", *Working Paper* 265, The Jerome Levy Economics Institute of Bard College, 1999.

¹² El comportamiento de las tasas de desempleo en los 90 es revelador en este sentido. El desempleo promedio durante el período inicial

de auge de la convertibilidad (1991-1993) es del 7,6%, es decir, mayor al promedio registrado durante la depresiva década de los 80 (5,5% para 1980-1990). La tasa se dispara durante la recesión posterior, alcanzando un promedio del 15,4% (1994-1996). La fuerte recuperación posterior reduce ciertamente la tasa de desempleo, pero sólo a un promedio de 13,7% (1997-1998), es decir, a una tasa muy superior a la vigente durante el auge previo. La recesión en curso vuelve a elevar la tasa promedio al 15,4% (1999-2001). El nuevo piso parece haberse ubicado arriba del 12% (octubre de 1998) y el nuevo techo elevarse por encima del 18% (mayo de 1995, octubre de 2001) (en base a datos del INDEC).

¹³ En 1995 se inició un proceso de revaluación del dólar respecto de las principales divisas que alcanzó sus puntos culminantes con un 48% respecto del marco en 2000 y un 39% respecto del yen en 1998 (en base a los promedios anuales de tipos de cambio provistos por el *Pacific Exchange Rate Service* de la University of British Columbia).

¹⁴ En base a datos del MEYOSP (PBI e IIBF —ésta última no incluye los datos correspondientes al cuarto trimestre de 2001—, que registró un descenso mucho más profundo de la inversión que los ya registrados en los tres trimestres previos), *Boletín Informativo Techint* 307, julio-septiembre 2001 (productividad, entendida como costos laborales unitarios, que no incluye datos del 2001) e INDEC (desempleo).

¹⁵ Los datos, que reflejan las tasas de crecimiento equivalente anual entre extremos, son de CEPAL (D. Heymann: "Políticas de reforma y comportamiento macroeconómico", en D. Heymann y B. Kosacoff (eds.): *La Argentina de los noventa*, Bs.As., EUDEBA-CEPAL, 2000, tomo I).

¹⁶ Consideremos, por ejemplo, las posiciones relativas de Argentina y Brasil. La mencionada tasa de aumento de la productividad del trabajo industrial debería haber sido de un 10% anual para que la economía argentina mantuviera su competitividad *vis à vis* la brasileña durante los 90 (*Boletín Informativo Techint*, cit.). El tipo de cambio sobrevaluado determinaba, por

su parte, que a fines de la década los costos salariales promedio en la industria brasileña (incluyendo sueldo, aguinaldo, vacaciones, cargas sociales y premios), con el real a U\$S 1,9 resultante de la devaluación de 1999, fueran de U\$S 9.000 anuales contra U\$S 18.400 para la industria argentina (*Página/12, Suplemento Cash*, 21/11/99). Entre 1989 y 1999, las exportaciones totales argentinas aumentaron un 88,7%, mientras que las importaciones aumentaron un 526%, en ambos casos por aumentos más que proporcionales de las cantidades en un marco de precios a la baja; la participación de la industria en esas exportaciones, por su parte, declinó levemente (del 31% en 1989 al 28% en 1999) (*Documento de Trabajo* 7, Centro de Estudios para el Desarrollo, agosto de 2000).

¹⁷ Esta desaceleración se advierte claramente en los estimadores de actividad industrial: el EMI del MEYOSP la registra ya en septiembre, el IPI de FIEL hacia noviembre, y desde entonces continúa profundizándose. Los índices mensuales de utilización de la capacidad instalada (FIEL) comienzan, a partir de junio de 1998, a ser inferiores en todos los casos a los registrados en los mismos meses del año previo (datos del MEYOSP).

¹⁸ Aquí, como en adelante, la mayor parte de la información acerca de los conflictos proviene de un relevamiento de los principales diarios de circulación nacional (*Clarín, La Nación y Página 12*).

¹⁹ Para un análisis más detenido de esta coyuntura puede consultarse A. Bonnet: "Saber, creer y votar. 1999: elecciones menemistas", en *Cuadernos del Sur* 29, Bs.As., 1999.

²⁰ Estas fluctuaciones del riesgo país deben interpretarse, en definitiva, como la versión más sintética de la sanción acerca de las condiciones de explotación y dominación del trabajo en un país dado por parte del comando global del capital-dinero. Para ampliar acerca de este mecanismo de sanción puede consultarse A. Bonnet: "The command of money-capital and Latin American Crisis", cit.

²¹ Esta "Línea de Crédito Contingente", en términos del FMI, es una línea de crédito imple-

mentada por vez primera en este caso. Alcanzaba supuestamente los U\$S 39.200 millones (o sea, el 90% de los pagos de deuda externa a desembolsar en el 2001 y el 70% de los correspondientes al 2002). Es importante tener en cuenta que ese crédito contingente provenía de distintos prestamistas (un consorcio constituido por el FMI, el BM, el Estado Español, varios Bancos Internacionales y las AFJPs) y sería desembolsado en distintas condiciones. Su intención era influir a la baja en las altas tasas de interés vigentes.

²² Respecto del presupuesto en ejecución, el ajuste implicaba una reducción de gastos de \$ 890 millones para el estado nacional, 361 de los cuales eran el 20% del presupuesto universitario, y de \$ 968 millones a las provincias, 770 de los cuales eran el fondo de incentivo docente.

²³ Dicha reestructuración de la deuda implicaba la postergación de vencimientos hasta el 2005 de principal e intereses por unos U\$S 29.500 millones, con una tasa anual del 15%. Implicó un fuerte incremento de la deuda (de unos U\$S 40.000 millones entre principal e intereses) y escandalosas comisiones pagadas a los bancos internacionales intervinientes (BBVA-Francés, Río-Santander, etc., de U\$S 141 millones. Pero apenas unas semanas más tarde, los títulos de deuda de corto plazo pagaban ya tasas del 17 al 21%.

²⁴ Para un análisis más detallado de estas elecciones, sumamente complejas, véase A. Bonnet: "Elecciones 2001: nadie vota a nadie", en *Cuadernos del Sur* 32, Bs.As., 2001.

²⁵ Los depósitos totales pasaron de U\$S 85.308 a 66.937 millones entre enero y noviembre, esto es, de U\$S 52.705 a 46.758 millones y de \$ 32.603 a 20.179 millones. Y esta fuga venía acelerándose: tan sólo durante noviembre los depósitos se habían reducido de U\$S 49.676 a 46.758 millones y de \$ 22.198 a 20.179 millones (datos del BCRA).

²⁶ Se trata de un congelamiento de los fondos depositados en las cuentas bancarias en su conjunto, incluyendo las de sueldos, con un máximo inicial de extracción de U\$S 250 semanales y de giro al exterior de U\$S 1.000.

²⁷ Para entender la importancia que habían alcanzado los depósitos nominados en dólares entre los ahorristas debe tenerse en cuenta que la convertibilidad implica, por definición, una dolarización velada de la economía: el proceso de "dolarización", es decir, de sustitución de la moneda local por una divisa extranjera, comienza siempre precisamente por el dinero *qua* reserva de valor. Véase en este sentido, entre otros, P. Salama: *La dolarización*, México, Siglo XXI; P. Salama y J. Valier: *La economía gangrenada. Ensayo sobre la hiperinflación*, México, Siglo XXI, 1992; G. Carchedi: "La dolarización, el señoreaje y el euro", en *Cuadernos del Sur* 30, Bs.As., 2000.

²⁸ El monto de los billetes y monedas en manos de los particulares se redujo de \$ 11.608 a 8.589 millones (datos del BCRA).

²⁹ Del total de la deuda externa nacional de entonces, unos U\$S 132.000 millones, esa primera fase negociada entre los tenedores locales (grandes inversores como las AFJPs, bancos y aseguradoras) implicaba 50.759 millones, con un descenso de la tasa de interés del 9-14% en que se situaba al 7%, a cambio de una garantía sobre la recaudación tributaria. El canje total abarcaría U\$S 82.000 millones, 62.000 en títulos nominados en dólares y 20.000 en otras divisas.

³⁰ La relativa prescindencia del FMI ante la crisis financiera argentina parece haber respondido, en principio, a una serie de razones entre las que se cuentan: 1) el cuestionable éxito de intervenciones previas, en particular durante la crisis del sudeste asiático, y la creciente controversia desatada dentro del *establishment* a propósito de las mismas; 2) al endurecimiento de las posiciones de EE.UU. en su seno, resultantes de la asunción de la administración republicana de Bush hijo; y 3) al ensayo de una nueva estrategia de preservación del sistema financiero internacional mediante una suerte de aislamiento del mercado financiero en crisis.

³¹ Datos del MEyOSP (dinero, depósitos, producto e inversión, la que no incluye último trimestre), CEPAL (formación de capital, índices bursátiles, inflación, balanza de pagos y deuda),

INDEC (desempleo y subempleo) y FIEL (capacidad instalada).

³² En este sentido, pueden inscribirse dentro de un conjunto más amplio de movimientos sociales en cuyas estrategias el manejo del espacio desempeña un papel fundamental, como es el caso del MST de Brasil o el EZLN de México.

³³ En efecto, el número de cortes aumentó permanentemente desde 1997, alcanzando los 252 en 1999, los 514 en 2000 y los 996 hasta septiembre de 2001. Para todo el período considerado el 30% fueron en el Gran Buenos Aires (592), el 12% en la Capital (238), el 11% en Jujuy (208), el 7% en Neuquén (132), el 6% en Tucumán (115) y un 5% en Chaco, Río Negro y Salta (de 90 a 100 cortes en cada caso), según datos de E. Lucita: "Cortando rutas, abriendo nuevos senderos", en *Cuadernos del Sur* 32, Bs.As., 2001.

³⁴ Hacia comienzos de 2001 se registra un incremento en los conflictos laborales. Sin embargo, buena parte de los mismos son protagonizados por trabajadores del sector público mientras que, entre los trabajadores del sector privado, la conflictividad retrocede levemente (A. Piva, op.cit.).

³⁵ Se trata de modalidades de lucha distintas y asociadas predominantemente con distintos sujetos sociales, pero no comunicadas entre sí: los militantes de vanguardia cortaron las calles de la city porteña y los aeronáuticos las pistas de aterrizaje como los piqueteros cortan las rutas, los sectores medios escracharon a los dirigentes políticos como los hijos de desaparecidos escrachan a los represores, y así sucesivamente. Esta comunicación interna entre moda-

lidades de lucha y sujetos diversos es uno de los fenómenos más interesantes de la creatividad de las masas.

³⁶ Incluso medios progresistas se sumaron gustosos a la verdadera campaña de demonización de la violencia callejera desatada tras la insurrección: revísense, por ejemplo, las ediciones de enero de *Le Monde Diplomatique* y *Página/12*.

³⁷ Es interesante advertir que estas acciones directas de violencia callejera pueden equipararse, en muchos sentidos, a las acciones del denominado "movimiento anti-globalización" que se extendió de Seattle, pasando por Génova, hasta Barcelona.

³⁸ La noción de "mediadores evanescentes", que emplea Slavoj Žižek para referirse al papel de los disidentes anti-stalinistas durante el proceso de restauración del capitalismo en la ex URSS, se aplica perfectamente al papel de estos partidos de centro-izquierda durante las transiciones entre administraciones signadas por la continuidad de las políticas neoconservadoras (véase S. Žižek: "Multiculturalismo, o la lógica cultural del capitalismo multinacional", en F. Jameson y S. Žižek: *Estudios culturales. Reflexiones sobre el multiculturalismo*, Bs.As., Paidós, 1998).

³⁹ Así como ese disciplinamiento impuesto por la convertibilidad es un caso más de las políticas monetarias de disciplinamiento del trabajo implementadas por el neoconservadorismo, como en el monetarismo thatcherista, este consenso pasivo no es sino un caso de los característicos consensos "TINA" (del "*There is no alternative*" de M. Thatcher) contruidos por el neoconservadurismo.

dialéctica

Secretaría General C.E.F y L. Revista de Filosofía y Teoría Social